

ÍNDICE AI: MDE 15/78/99/s

EMBARGADO PARA SU TRANSMISIÓN HASTA LAS 05.01 HRS GMT DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1999

Israel: Destrucción de viviendas -- A los palestinos se les dan «quince minutos para irse...»

El 26 de enero, Ahmed Mahmoud Abu Awais observó con horror la llegada a Isawiyeh (Jerusalén oriental), de más de un centenar de policías armados de la Guardia de Fronteras acompañados por máquinas de demolición que comenzaron a destruir la vivienda de cuatro habitaciones en la que vivían 14 miembros de su familia, sin darles tiempo a sacar los muebles. Aproximadamente un centenar de habitantes del lugar rodearon a las tropas y comenzaron a arrojarles piedras. Los agentes de la Guardia de Fronteras utilizaron sus porras y dispararon a corta distancia balas metálicas cubiertas de goma, matando a Zaki 'Ubayd, padre de familia de 28 años.

Caso estudiado por la visita de investigación de Amnistía Internacional en junio de 1999.

Miles de palestinos como Ahmed viven bajo el constante temor de que su casa sea demolida por las autoridades israelíes por no tener ninguna posibilidad de conseguir un permiso de construcción, ni siquiera para terrenos que han pertenecido a sus familias durante generaciones. Sin ese permiso, su casa es ilegal a todos los efectos.

«Habitualmente no avisan de la fecha ni la hora de la demolición. La familia sólo tiene quince minutos para sacar sus pertenencias antes de que arrojen sus muebles a la calle y derriben la casa», relata Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

Los delegados de Amnistía Internacional, entre los que se encuentra Anthony Coon, experto independiente en planificación urbanística internacional, llevaron a cabo una visita de investigación a Israel y Cisjordania en mayo y junio de 1999. Los resultados de esta visita, publicados en el nuevo informe, titulado *Demolition and dispossession: the destruction of Palestinian homes*, muestran a las claras que las leyes israelíes y las órdenes del ejército se aplican según un doble rasero, uno para los palestinos y otro para los israelíes.

«Los palestinos son víctimas de esta actuación sin más razón que el hecho de que son palestinos. La destrucción de sus viviendas tiene que ver sin duda con la política discriminatoria de Israel para restringir el desarrollo palestino a las zonas urbanas existentes», ha manifestado Anthony Coon.

«En el caso de los ciudadanos israelíes la cosa cambia. Apenas tienen problemas para conseguir permisos de construcción y son muy raros, por no decir inexistentes, los casos de destrucción de viviendas, incluso construidas sin permiso.»

Amnistía Internacional opina que la política de destrucción de viviendas constituye una grave violación de derechos humanos contra los palestinos que residen en Cisjordania.

Las esperanzas de que las demoliciones de viviendas palestinas cesarían con la firma del acuerdo de paz de Oslo de 1993 han resultado vanas. Desde 1995, las máquinas demoledoras han dejado sin techo a unas cinco mil personas, dos mil de ellas niños. Recientemente, el nuevo gobierno israelí de Ehud Barak creó una comisión interministerial para estudiar las demoliciones de viviendas en Cisjordania, pero las máquinas no han dejado de funcionar.

Por ejemplo, en noviembre de 1999 fueron derribadas dos casas en Jerusalén oriental. Actualmente, sólo en Jerusalén oriental están amenazadas por órdenes de demolición 10.000 casas, que albergan a un tercio de la población palestina.

«Las personas y las familias cuyas viviendas han sido demolidas se enfrentan a una situación gravísima —afirma Amnistía Internacional—. A

menudo sus casas son todo lo que tienen. Cuando llegan las tropas, las familias suelen estar demasiado indignadas y aterrorizadas para poner a salvo sus pertenencias en el breve plazo que los soldados les dan para evacuar el domicilio.»

«El trauma de verse desposeídos puede arrastrar a esas familias al resentimiento y la desintegración. Muchas no tienen más elección que irse a vivir con familiares en condiciones de hacinamiento o vivir en tiendas de campaña», añade la organización.

Un abogado palestino dijo a la delegación de Amnistía Internacional durante su visita: «Desde Oslo hasta la actualidad ni a uno solo de mis clientes se les ha concedido un permiso de construcción en la zona C [...]».

La zona C comprende casi tres cuartas partes de los terrenos de Cisjordania, e incluye muchas de las oportunidades de desarrollo urbano y rural. Sin embargo, los representantes de la Administración Pública en los territorios ocupados dijeron a los delegados de Amnistía Internacional, no una sola vez, sino muchas, que la política de las autoridades militares desde 1995 ha sido «no conceder a palestinos permisos de construcción de nuevos edificios en la zona C».

«Al hacer demoler las casas de los palestinos y negarles a éstos permisos de construcción, el gobierno israelí ha violado las obligaciones de la legislación internacional de derechos humanos y el derecho humanitario que se comprometió a respetar», ha afirmado Amnistía Internacional, que concluyó: «Esta política debe terminar inmediatamente».

Información general

Durante la visita de investigación de Amnistía Internacional, la delegación se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales palestinas e israelíes, abogados, urbanistas y técnicos. Los delegados realizaron visitas sobre el terreno y se entrevistaron con víctimas de demoliciones y embargos de tierra, así como con autoridades de la Administración Pública de Israel.

Si desean más información, consulten el informe *Israel and the Occupied Territories: Demolition and dispossession: the destruction of Palestinian homes* (Índice AI: MDE 15/59/99), llamen a la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono +44 171 413 5566, o visiten nuestro sitio web en <http://www.amnesty.org>